

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: SANTIAGO MUÑOZ ÁLVAREZ
DEMANDADO	: ITAÚ CORPBANCA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-021-2021-00437-01
RADICADO INTERNO	: 139-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 235

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita con el escrito de la demanda se DECLARE que el demandante tiene derecho a que ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA le reconozca y pague la pensión vitalicia de jubilación prevista en el capítulo décimo de la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre 1985 y 1987, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 71, **a partir del 04 de julio de 2009**, agregando que dicha prestación deberá regirse por los artículos 54, 55 y 58 de la convención referida; solicita igualmente se DECLARE que la pensión de jubilación tiene prerrogativas de ser vitalicia, compatible y excluyente con la pensión legal que actualmente recibe el demandante. Asimismo, solicita se CONDENE a la entidad demandada a indexar la base salarial con la que se debe determinar el valor de la primera mesada pensional del actor por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 1998, fecha de terminación del contrato, y el 04 de julio de 2009, fecha

en que se cumplía la edad o se hacía exigible el derecho; que se CONDENE a la entidad al pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación al demandante de forma retroactiva desde el 04 de julio de 2009, teniendo como mesada inicial \$3'816.701 para el año 2009 y hacía el futuro, incluyendo mesadas adicionales y reajustes legales. De igual manera se solicita el reconocimiento de los intereses moratorios sobre el pago de las mesadas o la respectiva indexación.

De manera **subsidiaria** solicita condenar a la demandada al pago de la pensión reconocida mediante acuerdo entre las partes de conformidad con las condiciones establecidas en la Convención Colectiva de 1985, al igual que el reconocimiento de los intereses moratorios o la indexación, asimismo solicitando la condena en costas a favor del demandante.

Como fundamentos de hecho sostiene que el demandante nació el 04 de julio de 1954, por lo que a fecha del 04 de 2009 ya contaba con 55 años de edad; que el demandante prestó sus servicios mediante contrato de trabajo escrito en la ciudad de Medellín, de manera personal y continua al Banco Comercial Antioqueño SA, hoy conocido como ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA SA, desde el **21 de febrero de 1979 hasta el 01 de marzo de 1998**, fecha en la que se terminó el vínculo laboral producto de una conciliación, acumulando un tiempo de servicio superior a 20 años; que el demandante es beneficiario de lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo del 23 de agosto de 1985, vigente hasta el año 1987, según el parágrafo del artículo 01 de la Convención y respuesta del banco con fecha del 04 de febrero de 2021; que el demandante se desvinculó del banco producto de la conciliación celebrada el **19 de marzo de 1998** cuando tenía 43 años cumplidos y 20 años de servicio acreditado, en la cual se pactó el reconocimiento de una pensión transitoria de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio del último año la cual sería pagada hasta que fuera reconocida la pensión de vejez por el ISS o un fondo privado de Pensiones, momento a partir del cual el banco continuaría pagando la diferencia pensional.

Narra que el demandante tuvo como sueldo promedio devengado **en el último año de servicio equivalente a \$1'706.858**; que el demandante cumplió 20 años al servicio del banco el 21 de febrero de 1999, causando en ese momento la pensión convencional y 55 años el 04 de julio de 2009,

cumpliendo así con los requisitos estipulados en la Convención, los cuales establecían una pensión mensual vitalicia de jubilación. Señala que el artículo 54 del CCT establecía el monto de la pensión y como se liquidaría dicha pensión convencional tomando en cuenta el sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro; del análisis normativo concluye que el computo de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, de conformidad con el promedio de sueldo básico del año anterior al retiro del empleado. Manifiesta que la entidad demandada ha reconocido pensiones de jubilación por el cumplimiento de tiempo de servicio y que cumplieron la edad establecida en la Convención después de finalizada la relación laboral; que además el demandante, con el fin de interrumpir la prescripción, presentó solicitud a la entidad el 14 de febrero de 2020 solicitando el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación consagrada en la Convención Colectiva del 23 de agosto de 1985, al igual que mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación (fls. 001 al 027 del Expediente Digital 002).

CONTESTACIONES A LA DEMANDA

La entidad ITAÚ CORPBANCA dio respuesta a la demanda manifestando que es cierto que el demandante percibía un salario promedio del último año de **\$1'706.858**. Sin embargo, considera que no es cierto que la relación laboral se haya dado en los términos planteados por el demandante. Aclara que existió un vínculo laboral entre el demandante y el Banco Comercial Antioqueño SA, hoy ITAÚ, con fecha de inicio el 21 de febrero de 1979 y finalización el 01 de marzo de 1998, por mutuo acuerdo entre las partes, quedando plasmado en el acuerdo de conciliación firmado el 19 de marzo de 1998. Agrega que, al momento de la terminación del contrato, el demandante no tenía 20 años de servicio prestado.

Respecto a la Convención Colectiva de Trabajo -CCT- aplicable al caso del demandante, señala que es la de jubilación convencional, vigente desde 1991 hasta 1993, según lo establecido en el acta de conciliación del 19 de marzo y el artículo 54, que establece los requisitos para ser beneficiario, que son cumplir 55 años -hombres- y tener 20 años de servicio en la compañía. Indica que, al momento de finalizar el vínculo laboral, la Convención Colectiva de Trabajo de 1985 a 1987 no estaba vigente, y que para el momento de entrar en vigencia dicha Convención, el demandante tenía 33

años de edad y 8 años de antigüedad en el banco. Agrega que tampoco se cumplían los requisitos al momento de la CCT de 1991, ya que el demandante tenía 39 años de edad y 14 años de servicio.

La entidad demandada señala que extendió por su propia voluntad el beneficio convencional al demandante, quien hasta 2009 no había completado el tiempo de servicio y solo contaba con el requisito de la edad, reconociendo la pensión transitoria de jubilación convencional a partir del 02 de marzo de 1998. Indica que esta pensión es compartida con la pensión de vejez, que sería reconocida posteriormente por Colpensiones, y que se establece como compartible en el acta de conciliación de 1998. Según el análisis del acta de conciliación, concluye la entidad demandada, que al demandante se le reconoció la pensión de jubilación a través de un acuerdo de conciliación que le extendió el beneficio de la CCT de 1991, la cual era compartida y quedaría a cargo de la administradora de pensiones una vez cumpliera los requisitos para la pensión de vejez. Invoca como sustento a su favor la sentencia SL 1796 del 7 de mayo de 2019, que reiteró lo expresado en sentencia SL 4080 del 2018 respecto de las pensiones compartidas.

La entidad demandada manifiesta que por mandato legal este tipo de pensiones extralegales tienen una vocación de compartidas, y en caso de ser reconocidas por el Sistema de Seguridad Social por subrogación, el mayor valor estaría a cargo del empleador únicamente. Señala que ha realizado el pago de las mesadas de la pensión convencional desde el 02 de marzo de 1998, además de continuar pagando los aportes en pensión por invalidez, vejez y muerte hasta que Colpensiones reconoció la pensión de vejez del demandante, la cual es compartida actualmente por ITAÚ. Agrega que también ha reconocido el mayor valor existente entre la pensión reconocida por la empresa y la otorgada por el antiguo ISS.

Por otro lado, la entidad demandada señala que no es cierto que el demandante fuera beneficiario de la Convención Colectiva de 1985, ya que, al momento de la finalización del contrato de trabajo, por mutuo acuerdo, se encontraba en vigencia otra Convención Colectiva que era aplicable al demandante. Aclara que, al momento de la terminación del contrato de trabajo, no se encontraba vigente la CCT de 1985, sino la de 1991 a 1993. Destaca que la entidad no ha reconocido a ningún trabajador, en ningún

periodo, una pensión convencional basándose únicamente en la edad como requisito, ya que existen más requisitos para disfrutar de dicha pensión. Agrega que el demandante presenta una prueba certificada en la que la entidad demandada le informa sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional dos años después de terminado el vínculo, por haber incumplido los requisitos en ese periodo. Sin embargo, señala que el demandante percibe una pensión de jubilación de carácter compartido con Colpensiones. Además, menciona que el demandante presenta una demanda ordinaria laboral con pretensiones similares a las del demandante y que el Juzgador en esa oportunidad determinó que la pensión de jubilación aplicable era la de 1989.

La entidad explica detalladamente cómo la entrada en vigencia de una nueva Convención Colectiva le quita vigencia a la anterior, ejemplificando y aclarando por qué la Convención de 1991 es la aplicable en el caso del demandante.

De otro lado se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones y propuso como excepciones las de cosa juzgada, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación y excepción genérica (fls. 001 al 037 del Expediente Digital 006).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 19 de mayo el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito ABSOLVIÓ a la entidad demandada, ITAÚ CORPBANCA, de todas las pretensiones en su contra, DECLARÓ probada la excepción de validez del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes para el reconocimiento de una pensión de jubilación voluntaria, CONDENÓ en costas al demandante, y fijó como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente. (Expediente Digital 010).

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la **parte demandante** interpone recurso de apelación argumentando que está de acuerdo con lo expresado por el juez de que la convención aplicable para el caso en concreto sería la de 1985-1987. También expresa su conformidad con el análisis realizado por el juzgado de

dividir las dos pensiones: una convencional que se crea con el tiempo de servicio de conformidad con la convención 1985-1987, y otra pensión que fue la que se le otorgó por medio de un acta de conciliación como una pensión voluntaria de jubilación al demandante, por lo que está de acuerdo en que esa pensión voluntaria existe y que fue reconocida por la entidad de forma voluntaria con un cálculo propio e independiente.

Ahora bien, respecto a por qué el demandante tiene derecho a acceder a la pensión de jubilación de la Convención de 1985-1987, se sostiene en primer lugar que, aunque en la demanda se inició solicitando un tiempo de servicio a partir del año 1979, es claro que dentro de la prueba documental lo inicial que aportó el banco cuando se solicitó la certificación laboral, apareció el tiempo de servicio del 21 de febrero de 1979, que fue el punto de partida para fundamentar los hechos. Sin embargo, se señala que dentro de la prueba documental existe un aporte del contrato de trabajo que da a entender que indica que la fecha real de inicio de las labores fue en el año 1977, y eso lo indica para según este dejar claro que no es que se haya puesto una fecha a capricho propio del apoderado sino que fue por un error presentado por parte de la demandada al momento de entregar los documentos solicitados para presentar la demanda, y se acepta de buena fe que la demandada acepta que la fecha de inicio de labores es de 1977.

Respecto a la causación del derecho a la pensión de la Convención de 1985, se expresa que el análisis inicial fue que estaba se causaba por el tiempo de servicio por lo que no entiende porque el juez posteriormente dice que no tiene derecho a la pensión convencional pues si bien la causo con ese tiempo de servicio que se realizó que fueron los más de 20 años al servicio de la entidad bancaria y que está demostrado en los extremos de la relación laboral dentro del proceso pues indica que si se está aceptando que el ingreso es en el año 1977 y el retiro es en el año 1998 la persona si cumplió con más de esos 20 años de servicio.

Con base en lo anterior, se considera que sí se tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión convencional, pues indica que no tiene nada que ver con que el banco de manera voluntaria haya decidido otorgarle una pensión de jubilación voluntaria y transitoria al demandante, ya que se considera que la negociación realizada a través del acta de conciliación no fue caprichosa, porque el empleado de la misma manera puede decir que el

prestó 20 años de servicio a la entidad a cambio de una contraprestación, y la negociación no se dio solo por un capricho sino porque no se le hizo el pago de una indemnización por terminación sin justa causa, sino que lo que se busco fue llegar a un arreglo para una terminación equitativa del contrato de trabajo por lo que indica que frente a esa terminación, el banco de mera liberalidad, y lo podía hacer de cualquier manera si él quería entregarle una pensión voluntaria pues precisamente como arreglo a ese tiempo que le presto a la entidad bancaria.

Que el hecho de que el banco le haya otorgado una pensión voluntaria no incide que haya un beneficio contrario a la pensión convencional, pues indica que si se acepta que lo que se hizo fue que a través de un acuerdo conciliatorio se estaba negociando la convención colectiva de trabajo y no se dijo, habría que analizar si realmente el beneficio a través del tiempo era mayor o menor con el pago tanto de la indemnización como de la pensión del mencionado artículo 54 de la Convención de 1985.

Indica que frente a este análisis también hay que revisar que si para el despacho existe una interpretación gramatical que es ambigua, indica que el mismo artículo 53 de la C.P que está por encima de la ley, habla de que si existe una duda frente a la interpretación que se está realizando se debe aplicar la más favorable.

Con base en esto, se señala que, si el despacho en primera instancia tenía alguna duda sobre la intención de las partes, no se puede quedar solo con la interpretación de decir que la intención del banco era anticiparle el pago de la convención o entregarle una pensión de jubilación para librarse de la obligación, sino que también habría que analizar cuál hubiera sido la intención del trabajador en determinar que el negoció con la entidad bancaria, sin presencia del sindicato, con la terminación del contrato y que esa fue la voluntad del empleado, esto es, negociar única y exclusivamente la terminación del contrato, y que en razón de ello se debe aplicar la interpretación más favorable.

Ahora bien, respecto al análisis del artículo 54 sobre el cálculo de la cuantía, citando lo expresado por el Tribunal Superior de Medellín, indica que dicho artículo inicialmente estipuló un porcentaje del 210%, que es la suma del 80, 60, 40 y 30% que trae cada uno de esos factores del salario básico del

trabajador, y que el artículo 55 estableció una limitante de que no podía superar el valor del sueldo mensual, lo que indica que el valor del sueldo mensual que para el caso del demandante era de \$1'706.588, es el valor límite que tiene para el reconocimiento del pago de la prestación lo que quiere decir que el valor de la mesada pensional inicialmente reconocida por la convención en el artículo 54 con la limitante del artículo 55 sería de \$1'706.588

Por último, indica que no está de acuerdo frente a la interpretación del despacho en relación con el hecho de que el Banco le haya querido reconocer un valor del 75% del promedio de lo devengado en el último año, eso no tiene nada que ver con que el sueldo mensual haya sido 2.5 o 2.8 veces inferior a lo reconocido, pues indica que el banco puede entregarle realmente por ese acuerdo entre las partes y por mera liberalidad el valor que el determine indicando que esa era la finalidad del acuerdo suscrito.

Se agrega y reitera que la pensión voluntaria y transitoria otorgada por la entidad fue como consecuencia de la terminación del contrato y no de la Convención Colectiva, ya que de tratarse de esta última se habrían especificado en el acta de conciliación las circunstancias de aplicación tanto normativas como de procedimiento para el pago de esta, situación que no ocurrió en la conciliación.

Concluye la apelación solicitando al Juzgador en segunda instancia que confirme lo referente a la Convención Colectiva aplicable que es la 1985-1987, que el reconocimiento a través del acta de conciliación se dio por una pensión voluntaria de jubilación otorgada de mera liberalidad por la entidad bancaria, en la que no hay discusión. También se solicita el reconocimiento de una pensión convencional extralegal de la Convención Colectiva aplicable de manera compatible con la pensión reconocida por ley. Se agrega que la cuantía debe ser establecida según el artículo 54 de la Convención de 1985-1987, con un monto del 100% del salario mensual devengado por el demandante a la fecha anterior al retiro, el cual debe ser indexado al cumplimiento de los 55 años, ya que el demandante cumplió los 20 años de servicio al empleador y la edad la cumplió posterior al retiro, lo cual constituye un derecho adquirido. Se solicita que se apliquen los intereses moratorios y que se revoque la condena en costas y, por el contrario, se condene a favor del demandante a las costas del proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La entidad demandada presenta sus alegatos de conclusión argumentando que la sentencia debe ser confirmada por los motivos expuestos por el a quo. Afirma que, en el caso en cuestión, el demandante y la entidad llegaron a un acuerdo para finalizar su vínculo laboral el 01 de marzo de 1998. En ese momento, la CCT de 1985-1987 no estaba vigente y no se aplicaba al demandante, ya que no cumplía los requisitos de edad y antigüedad requeridos. Tampoco cumplió con los requisitos de pensión de jubilación durante la vigencia de la CCT 1991-1993. Sin embargo, por mera liberalidad, la entidad extendió al demandante el beneficio de una pensión transitoria de jubilación a partir del 02 de marzo de 1998. Manifiesta que esta pensión es compartida con la pensión de vejez reconocida posteriormente por el ISS - Colpensiones -, según lo acordado en el acta de conciliación de marzo de 1998.

La entidad demandada sostiene que la pensión reconocida tiene carácter compartido, ya que así se acordó en las diferentes CCT desde 1985. Además, argumenta que el demandante no tiene derecho a una segunda pensión extralegal, ya que la pensión convencional ya ha sido reconocida. Se mencionan sentencias del Tribunal Superior de Medellín en casos similares en los que la entidad demandada fue absuelta. En conclusión, la entidad demandada solicita que se confirme la sentencia basándose en los argumentos expuestos, defendiendo que la pensión reconocida es la pensión convencional y que no procede una pensión de jubilación adicional.

Por su parte, el demandante plantea sus alegatos de conclusión sosteniendo que, en primer lugar, se debe tener en cuenta el precedente constitucional establecido en la Sentencia Constitucional SU-228 de 2021, que analizó una cláusula convencional similar a la que se discute en este proceso. En esa sentencia, la entidad demandada y un trabajador que finalizó su vínculo laboral antes de cumplir la edad establecida en la convención colectiva; la sentencia estableció que la pensión se causa con el tiempo de servicio y que la edad es solo una condición para su exigibilidad. El demandante argumenta que no aplicar este precedente constitucional vulneraría sus

derechos fundamentales, como la igualdad, el debido proceso y la seguridad social, destacando que se trata de una Sentencia de Unificación.

Se sostiene que existen pruebas calificadas dentro del proceso que demuestran que las partes tenían claramente establecido que la pensión convencional se causa únicamente con el tiempo de servicio y que la edad es solo una condición para exigirla. Se trae a colación una respuesta a un oficio del Juzgado, en la cual el banco demandado manifiesta de manera expresa y textual que reconocen la pensión de jubilación contemplada en el artículo 54 de la convención colectiva de trabajo a aquellos que cumplen la edad requerida después de haber acreditado 20 años de servicio. Además, se aportaron actas de conciliación firmadas por la demandada que ratifican esta postura.

Frente a la cuestión de la pensión con el tiempo de servicio, se ampara en la sentencia SU-228, en cuyo proceso fue demandada la entidad ITAÚ y se analizó la pensión convencional de la entidad demandada en el presente proceso, donde se determinó que es el tiempo de servicio la causa eficiente de la prestación y la edad es solo una cuestión de exigibilidad y no existencia del derecho. Asimismo, manifiesta frente al régimen de transición para la aplicación exclusiva y preferente de las normas convencionales para el reconocimiento de la pensión vitalicia convencional que la normatividad trae consagrado en el artículo 71 de la CCT 1985-1987 que todo lo establecido en materia pensional dentro de la Convención va a ser aplicado exclusivamente a quienes a fecha del 31 de agosto de 1985 tuvieran contrato por escrito y vigente con la entidad. Agrega que la norma señala, de forma taxativa, que al personal vinculado a partir del 1ro de septiembre de 1985 no les era aplicable el capítulo pensional de la convención, sino la normatividad oficial vigente en materia al momento de comenzar con el disfrute de ese derecho.

Continúa exponiendo que la norma que estableció la compatibilidad legal es el Decreto 2870 de 1985, el cual entraría en vigor desde el 17 de octubre de 1985, destacando el hecho de que la CCT aplicable al demandante es del 23 de agosto de 1985, momento para el cual todas las pensiones extralegales eran compatibles con la pensión legal; señala que el artículo 71 de las Convenciones Colectivas de 1987 a 1993, dispuso que las normas que regularían el tema de pensión serían las de la convención de 1985,

capítulo 10. Agrega que dicha norma, a la fecha de la presentación de los alegatos, no ha sido modificada, derogada, transformada o denunciada. Manifiesta que, estando vigente el Decreto 2879 de 1985, las partes pactaron expresa y textualmente el reconocimiento de una pensión vitalicia, excluyente con la legal, a elección del trabajador; pacto que concuerda con lo expresado en la excepción de compatibilidad contenida en el artículo 5to del Decreto 2879 de 1985. Señala el demandado el carácter excluyente de la pensión convencional con la legal, prohibiéndose su subrogación; que en ningún sentido los artículos 54 y 70 de la Convención de 1985 pactaron o establecieron la compatibilidad de las pensiones a cargo del banco. Considera que, si la intención de las partes era pactar el reconocimiento de una pensión compartida, esta debía tener un carácter pactado de temporal o transitoria, agregando que el capítulo 10 de la Convención de 1985 no ha modificado, denunciado, derogado o transformado por ninguna de las convenciones celebradas con posterioridad.

Sostiene la parte demandante que, frente al acta de conciliación y la convención colectiva de trabajo, indicando que la Convención fue modificada a través de un documento privado entre las partes debido a que tenía por única finalidad la negociación de la terminación del contrato de trabajo del demandante. Manifiesta que en ningún acápite del acta se estipuló que el pago de la pensión convencional transitoria de jubilación era la contenida en la CCT, ni tampoco el año o artículo que fundamentara su reconocimiento. Señala que la palabra "convencional" en la pensión refiere a un acuerdo celebrado entre las partes con la finalidad de terminar el contrato, señalando que el contexto de la palabra convención hace exclusiva referencia a lo convenido entre las partes. Manifiesta la parte que el acuerdo conciliatorio fue firmado entre las partes sin la presencia del Sindicato de Trabajadores, lo que implicó que la entidad demandada hiciera uso de acuerdos privados para desconocer las CCT de manera individual, atentando contra el derecho fundamental de asociación que parte de los acuerdos internacionales de la OIT ratificados por Colombia. La parte demandante resalta que se le cambió la cualidad de vitalicia de la pensión de jubilación del artículo 54 por transitoria y voluntaria; al igual que se le cambió la calidad del artículo 58 de ser excluyente con la legal para, en su lugar, ser tratada como compartida con Colpensiones. En cuanto al monto de la pensión, manifiesta que en el acuerdo conciliatorio se determinó una equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro, lo cual no está determinado en la

CCT, ya que propone una fórmula diferente donde el tope máximo equivale al 100% del promedio devengado en el año anterior al retiro. Pone de presente la sentencia SL-5265 de 2021.

Ahora bien, frente a la liquidación y cuantía de la pensión, sostiene que el artículo 54 de la Convención establece que se liquidaría tomando como promedio el sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro de la institución; interpretando que, en ese orden de ideas, la suma de los porcentajes sería: 80% + 60% + 40% + 30% para un total de 210%. Resalta la parte demandante que el artículo 55 de la CCT especifica que en ningún caso la pensión de jubilación excederá el valor del sueldo mensual, lo que a criterio del demandante implica que la liquidación de la jubilación de la CCT es del 100% del sueldo.

Por todo lo anterior solicita se acceda a las pretensiones de la demanda; se pronuncie con respecto a la pensión de jubilación de la CCT -1985-; se pronuncie sobre la compatibilidad de la pensión, al igual respecto a la cuantía y liquidación del artículo 54 y sobre los intereses moratorios.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar si el demandante tiene derecho a acceder a la pensión de jubilación de la Convención de 1985-1987, en caso de ser positivo en que monto, si hay lugar a los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso

Dentro del proceso está probado y no existe discusión acerca de lo siguiente:

- Que el señor SANTIAGO MUÑOZ ÁLVAREZ nació el 04 de julio de 1954, por lo que cumplió los 55 años, el mismo mes y día del año 2009. (fls 04 y ss PDF 03).
- Que el señor SANTIAGO MUÑOZ ÁLVAREZ trabajó para el Banco Comercial Antioqueño SA, hoy ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA SA, desde el 31 de enero de 1977 hasta el 01 de marzo de 1998, según lo aceptado en la contestación de la demanda, y el contrato laboral visible a folios 09 del PDF 03 del expediente, lo que indica que prestó el servicio por un total de 21.9 años.

- Que el último **salario mensual** para la fecha de terminación del contrato era de **\$615.298**, y el 2 de marzo de 1998 comenzó a recibir su mesada pensional reconocida de forma voluntaria por el empleador en cuantía de \$1.280.144, es decir, en el 208.05% **del último salario mensual**. (fls 08 del PDF 03, y 154 PDF 07).
- Que a partir 1 de febrero del 2015 la mesada de jubilación quedó compartida con el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, fecha desde la cual viene pagando solo el mayor valor en la suma de \$500.996, (fls 154 PDF 07)
- Que el contrato terminó por mutuo acuerdo el 01 de marzo de 1998, según consta en acta de conciliación del 19 de marzo de 1998, (fls 11 PDF 03), y según lo aceptado por la demandada en la contestación.
- Que presentó solicitud a la entidad el 14 de febrero de 2020 solicitando el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación consagrada en la Convención Colectiva del 23 de agosto de 1985, al igual que mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden.

1. De la vigencia de la convención colectiva.

Pretende la parte demandante se reconozca la pensión de jubilación consagrada en el artículo 54 de la convención colectiva 1985-1987, a partir del 04 de julio de 2009 de forma vitalicia compatible y excluyente con la pensión legal que actualmente recibe por parte del ISS hoy Colpensiones.

En orden de lo anterior el a quo indicó que para este la convención colectiva 1985-1987, respecto a la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 54 de la misma si era aplicable y se encontraba vigente pues según este el demandante contaba con una expectativa legítima respecto a los derechos consagrados en dicha convención pues a la terminación del contrato tenía cumplido el requisito de los 20 años de servicio, entre el 31

de enero de 1977 y el 01 de marzo del 1998, y solo le faltaba el cumplimiento de los 55 años de edad.

No obstante, lo anterior considera la Sala que deben realizarse varias precisiones en el siguiente sentido.

La convención colectiva según el artículo 467, del C.S.T, es “la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

Sobre el tema objeto de controversia se tiene que, conforme a jurisprudencia que ha venido reiterando la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, cuando ha abordado el tema de pensiones de jubilación consagradas en Convenciones Colectivas de Trabajo, ha manifestado que en este tipo de casos se debe analizar de acuerdo a lo suscrito en la convención colectiva, toda vez que puede suceder que en su texto se haya expuesto que el tiempo de servicio y la edad deben acreditarse en vigencia del contrato laboral, pero también sostener que la edad solo es una condición para exigir dicha prestación económica y no es necesario que el trabajador se encuentre prestando un servicio activo a la empresa.

Para el caso en concreto se tiene que el artículo 54 de la convención colectiva 1985-1987, consagra respecto a la pensión de jubilación convencional reclamada por la parte actora lo siguiente:

“Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la Institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación, que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del banco, sin tener en cuenta bonificaciones, así: sobre los primeros seiscientos pesos (\$600) del promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, el 80% de dicho sueldo; por los excedentes de seiscientos pesos (\$600) hasta mil pesos (\$1.000) el 60%; por los excedentes de mil pesos (\$1000) hasta tres mil pesos (\$3000) el 40% y por excedentes de tres mil pesos (\$3000) el 30%. De manera que el cómputo de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, en cuerdo con el promedio del sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro de la institución.

Teniendo claro lo anterior, para establecer si el demandante es beneficiario convención colectiva de trabajo suscrita el 26 de agosto de 1985 la cual **estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 1987**, debe precisarse que por haber laborado el demandante al servicio de la demandada hoy ITAÚ CORPBANCA entre el 31 de enero de 1977 y el 01 de marzo del 1998, por espacio de 21.09 años, cumpliendo de esta forma los 20 años de servicio el 31 de enero de 1997, y en razón de ello debe tenerse en cuenta que, esta es la fecha de causación de la prestación y la que se debe tener en cuenta a efectos de buscar cual convención colectiva se le debe aplicar.

Para dicha fecha, esto es, para el 31 de enero de 1997, **se encontraba vigente la convención colectiva 1995-1997**, la cual rigió entre el 15 de septiembre de 1995 y el 31 de agosto de 1997, pacto que, al no haber regulado, modificado o extinguido nada sobre aspectos pensionales, debía la entidad seguir reconociendo a los trabajadores todos los beneficios de la compilación convencional del 10 de septiembre de 1991, tal y como fue aceptado por el Banco Comercial Antioqueño en comunicado del 15 de septiembre de 1995, visible a folios 417 del PDF 07, en el que expresamente se indicó:

“El banco manifiesta que continuara reconocimiento para los trabajadores vinculados con contrato laboral con el Banco Comercial Antioqueño S.A, no procedentes del Banco Santander, todas las normas de la compilación convencional realizada **y firmada el diez (10) de septiembre de 1991**, y que no fueron modificadas, derogadas, o transformadas por la convención colectiva de 1993. Así mismo, continuaran vigentes las normas de la convención colectiva suscrita en septiembre de 1993, que no fueron modificadas, derogadas, o transformadas en la presente convención colectiva, suscrita el 15 de septiembre de 1995”. (resalto intencional)

De otro lado, es importante mencionar lo regulado en el artículo 58 y 71 de la convención colectiva, la cual estableció lo siguiente:

Artículo 58o. La pensión aquí fijada excluye y reemplaza la que sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacer efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. Si optare por la que se fija en la presente codificación, se entiende que el pago de ella incluye la fijada por la ley y por consiguiente el Banco al cancelarla cumple con las disposiciones legales al respecto.

*Artículo 71o. PENSIONES DE JUBILACIO. **Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente***

(compilación 1.985-1.987) artículo 54o. a 70o. inclusive, se aplicará solamente a quienes al 31 de agosto de 1.985 tengan celebrado contrato de trabajo por escrito y vigente en esa fecha con el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. A quienes ingresen con vínculo laboral a partir del 1 de septiembre de 1.985 no se les aplicará el régimen de pensiones ya mencionado y se someterá en materia de pensiones a las leyes y demás disposiciones oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar de su derecho. (resaltos intencionales)

De lo anterior se puede concluir con meridiana claridad que la convención colectiva 1995-1997 –que era la vigente para la fecha en que el demandante causó la pensión de jubilación con el cumplimiento de los 20 años de servicio- **compiló los beneficios que habrían de aplicarse en materia de reconocimiento pensional**, sin que haya lugar a remitirse a la aplicación de la convención colectiva 1985-1987, como se pretende la parte demandante, pues ambas convenciones consagraban los mismos requisitos para tener derecho a la pensión convencional solicitada.

En virtud de lo mencionado, en principio el actor podría tener derecho a la pensión de jubilación convencional, sino fuera porque al demandante mediante acuerdo conciliatorio celebrado entre este y el Banco Comercial Antioqueño hoy Itau Corbanca el 19 de marzo de 1998, (fls 11 PDF 03) se le reconoció una pensión de jubilación voluntaria por la sociedad demandada en los siguientes términos:

“QUINTA: No obstante tener tan solo 20.39 años de servicios al Banco y 43.69 años de edad el Banco hará una concesión especial y me otorgará a partir del 02 de marzo de 1998, una pensión convencional transitoria de jubilación del 75% del salario promedio devengado durante el último año que equivale a (\$1.280.144,00) **hasta que cumpla los requisitos de edad exigidos por el Instituto de Seguros Sociales** ó un Fondo Privado de Pensiones, donde el TRABAJADOR haya cotizado; **a partir de ese momento el BANCO me continuará pagando la diferencia que existiere, entre la pensión de jubilación que venía recibiendo y la que me otorgue el Instituto de Seguros Sociales** o un Fondo privado de Pensiones, como pensión de vejez”.

Lo anterior concuerda y se ve reflejado en la documental visible a folios 154 del PDF 07, de la cual se desprende que el demandante desde el 02 de marzo de 1998 comenzó a recibir su mesada pensional reconocida de forma voluntaria por el empleador en cuantía de \$1.280.144, y que **a partir 1 de febrero del 2015** la mesada de jubilación **quedó compartida** con el Instituto

de Seguros Sociales hoy Colpensiones, fecha desde la cual viene pagando solo el mayor valor en la suma de \$500.996.

Partiendo de lo anterior debe advertirse que según el contenido de la conciliación suscrita entre las partes, la cual goza de legalidad sin que exista (ningún vicio del consentimiento, ni objeto, ni causa ilícitas) concretamente en la cláusula quinta ya transcrita, en la misma se plasmó de manera clara y sin equívocos que a partir del 02 de marzo de 1998 el demandante empezaría a “recibir por parte del banco **una pensión convencional transitoria de jubilación**” y dado que el mismo ya cumplía con el requisito de tiempo establecido en la convención colectiva, claro es, que la voluntad de las partes fue anticipar el pago de dicha prestación, independiente de que se hubiera hecho alusión o no a los requisitos de la misma, pues, se dejó sentado que era la convencional, y no puede entenderse de otro modo, ya que de lo contrario se estaría reconociendo por un mismo tiempo, dos pensiones convencionales, y ello, en criterio de esta Sala no es posible, razón por la cual, se concluye, que el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes y en el cual se le concedió al demandante a partir del 02 de marzo de 1998, la pensión convencional, es la misma que hoy pretende reclamar, solo, que esta fue concedida de manera anticipada y sin tener en cuenta la edad, la cual es solo requisito de exigibilidad del derecho al ya haberlo causado.

Ahora, en el hipotético caso de argumentarse que la pensión reconocida en el acuerdo conciliatorio mencionado fue una pensión voluntaria, considera la Sala que no podría reconocerse la convencional solicitada en tanto que como ya se advirtió, se estaría reconociendo por un mismo tiempo dos pensiones, no siendo ello posible, pues el actor decidió acogerse de forma voluntaria al reconocimiento de dicha prestación que le era más beneficiosa al reconocérsele 11 años antes del cumplimiento de la edad, debiendo tenerse en cuenta que en los términos de la lógica y la experiencia se infiere que la voluntad del empleador en momento alguno era reconocerle al trabajador dos pensiones, una voluntaria y otra convencional, pues frente a la primera no tenía ninguna obligación que así se lo ordenara, más cuando no es cierto como lo afirma la parte demandante que la misma hubiera sido reconocida a título de indemnización por la terminación del contrato de forma injusta, pues en el mismo acuerdo conciliatorio nada se desprende al respecto, y por el contrario se observa que se reconoció al trabajador el

otorgamiento de una bonificación de retiro extraordinaria, única y especial, en la suma de \$15.000.000, para la fecha del retiro, y donde se dejó consignado que dicha bonificación correspondía a la **indemnización** convencional.

Ahora, en relación con la compatibilidad pensional solicitada respecto a la pensión que viene percibiendo del ISS hoy Colpensiones debe decirse lo siguiente.

Con la expedición del Decreto 2879 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del ISS, art.5 se estableció la figura de la compartibilidad para las pensiones extralegales reconocidas por los empleadores a sus trabajadores por medio de convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral **o de forma voluntaria** a partir de la fecha de expedición del mencionado Decreto. La precitada norma, fue derogada por el Decreto 758 de 1990, que mantiene la figura de la compartibilidad en las mismas condiciones establecidas en la norma anterior. El artículo 18, dispone:

*“Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, **siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.***

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”

Se trata de una subrogación en la que el empleador, como deudor de la pensión de jubilación, es reemplazado en su obligación de pagar las mesadas por el I.S.S. o Colpensiones, quien será el nuevo deudor, pero solo de los valores reconocidos por concepto de la de vejez con arreglo a la Ley. Se habla entonces de compartibilidad porque entre el empleador y la administradora de pensiones, comparten el pago de la pensión del trabajador.

En Rad No. 14207 de 2015 la S Laboral de la CSJ se pronunció sobre la figura de la compatibilidad pensional reiterando que:

*“En incontables ocasiones esta Sala de la Corte ha considerado que el efecto natural de la compatibilidad entre una pensión de jubilación extralegal y una de vejez, **es que a partir del cumplimiento de los requisitos para acceder a la segunda, el empleador que venía pagando la de jubilación solo quedará obligado a cancelar, si lo hubiere, el mayor valor que resulte.** Es lo que se conoce como subrogación que, comporta la sustitución del deudor de la obligación surgida en virtud de lo dispuesto en la ley que, como ya se dijo, puede ser total o parcial” (resalto intencional).*

El anterior criterio ha sido reiterado entre otras en sentencias SL4080-2018 y SL4555-2020.

En orden de lo anterior, frente a la compatibilidad y compatibilidad pensional ha indicado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL118-2019, con criterio reiterado en sentencias SL4555-2020, SL2238-2021, SL4654-2021, SL006-2022, SL527-2022 y SL1031-2022, lo siguiente:

Frente a este último punto, esta sala de la Corte ha señalado, con insistencia, que, por regla general, las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con las de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, pues la posibilidad de compartirlas sólo se generó tras la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985. Del mismo modo, ha adoctrinado que las excepciones a dicha regla sólo pueden provenir de un acuerdo entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.

Partiendo de lo mencionado es claro que las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, si son compatibles con las pensiones de vejez que otorgara el ISS hoy Colpensiones, pero después de la expedición del acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, solo es posible que opere la compatibilidad entre ambas pensiones, y en razón de ello no es posible como lo pretende la parte demandante que se le reconozca y paguen las dos pensiones de forma simultánea y autónoma, esto es, la de jubilación otorgada de forma voluntaria por el empleador desde el 02 de marzo de 1998 y la de vejez que viene reconociendo Colpensiones desde el año 2015, pues es claro que además

de lo consagrado en la normativa en cita, en el acuerdo conciliatorio ya referido se dejó claro que la misma sería reconocida **hasta que cumpliera los requisitos de edad exigidos por el Instituto de Seguros Sociales** para la pensión de vejez, y solo se le continuaría pagando en caso de existir la diferencia, entre la pensión de jubilación que venía recibiendo y la que le otorgue el Instituto de Seguros Sociales; como en efecto se viene haciendo según se desprende de la documental visible a folios 154 del PDF 07, de la cual se advierte que a partir del 01 de febrero de 2015, el empleador solo viene reconociendo la diferencia en la suma de \$500.996, (fls 154 PDF 07)

Ahora, respecto a la indexación de la primera mesada pensional se solicita en la demanda se CONDENE a la entidad demandada a indexar la base salarial con la que se debe determinar el valor de la primera mesada pensional del actor por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 1998, fecha de terminación del contrato, y el 04 de julio de 2009, sin embargo precisa la Sala que, al no salir adelante el reconocimiento de la pensión convencional en los términos antes descritos a partir del 04 de julio de 2009, fecha en la que el demandante cumplió los 55 años de edad, por no ser compatible con la de vejez reconocida por el ISS ni con la de jubilación reconocida por la demandada desde el 02 de marzo de 1998, dicha pretensión es improcedente.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por no prosperar el recurso de apelación en la suma de \$2920.000.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, según las razones argumentadas en la parte motiva.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, que ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor Ramón Emilio Moncada Pérez, según lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por no prosperar el recurso de apelación en la suma de \$2920.000.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: SANTIAGO MUÑOZ ÁLVAREZ
DEMANDADO	: ITAÚ CORPBANCA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-021-2021-00437-01
RADICADO INTERNO	: 139-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 30 de agosto de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 30 de agosto de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO